



Asamblea General

Distr. general
22 de noviembre de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 64º período de sesiones
(27 a 31 de agosto de 2012)**

Nº 25/2012 (Rwanda)

Comunicación dirigida al Gobierno el 13 de marzo de 2012

Relativa a: Agnès Uwimana Nkusi y Saïdati Mukakibibi

El Gobierno no respondió a la comunicación en el plazo de 60 días.

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue especificado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió la mencionada comunicación al Gobierno.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los

Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos el nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. Agnès Uwimana Nkusi, nacional de Rwanda y con residencia habitual en Kivugiza, sector de Nyamirambo, distrito de Nyarugenge (Rwanda), trabaja como periodista y editora en un periódico. La Sra. Uwimana lleva ejerciendo el periodismo más de diez años, primero en el periódico *Umuseso* y, posteriormente, como editora en *Umurabyo*, un periódico quincenal independiente publicado en idioma kinyarwanda y con una tirada de aproximadamente 100 ejemplares. Con anterioridad al actual período de privación de libertad, la Sra. Uwimana había sido detenida el 12 de enero de 2007 por publicar en el periódico *Umurabyo* una carta anónima supuestamente escrita por un antiguo miembro del partido del Presidente Paul Kagame, el Frente Patriótico Rwandés (FPR). La Sra. Uwimana, que no tuvo acceso a asistencia letrada, se declaró culpable de los cargos de divisionismo y difamación, a cambio de una reducción de la pena de cinco años a un año de prisión. Fue puesta en libertad el 19 de enero de 2008.

4. La Sra. Saïdati Mukakibibi, nacional de Rwanda y con residencia habitual en Kabagesera, sector de Runda, distrito de Kamonyi (Rwanda), trabaja como periodista en el periódico *Umurabyo*.

Detenciones y prisión preventiva entre julio de 2010 y febrero de 2011

5. Se informa de que, el 9 de julio de 2010, la Sra. Uwimana fue detenida por agentes de la policía de Kigali en Cyangugu (Rwanda), en casa de unos familiares políticos. No se le mostró ninguna orden de detención, y no se le informó de los cargos que se le imputaban hasta una semana después de su detención. Al parecer, la Sra. Uwimana no tuvo acceso a un abogado durante dos días.

6. Se informa de que, el 10 de julio de 2010, la Sra. Mukakibibi fue detenida por agentes de policía en la comisaría de Kigali, cuando fue a visitar a la Sra. Uwimana tras enterarse de su detención el día anterior. La Sra. Mukakibibi fue informada de los cargos que se le imputaban tan solo una semana después de su detención y no tuvo acceso a un abogado durante dos días.

7. Según la información recibida, ambas mujeres fueron encarceladas en la Prisión Central de Kigali, donde al parecer siguen recluidas. Durante las primeras semanas tras su detención, no se comunicó su paradero a sus familiares ni se les permitió recibir visitas, y se les informó oficialmente de las acusaciones formuladas contra ellas tan solo una semana después de su detención. Hasta entonces, se les dijo al parecer que su detención se debía a artículos publicados en el periódico *Umurabyo*, y se les mencionó la Ley sobre el Genocidio de Rwanda.

8. Durante su prisión preventiva, las Sras. Uwimana y Mukakibibi solicitaron en dos ocasiones la libertad bajo fianza, que les fue denegada por el Tribunal Intermedio de Nyarugenge debido a la supuesta gravedad de las acusaciones formuladas contra ellas. Durante ese período, la prisión preventiva de las Sras. Uwimana y Mukakibibi se basó en los artículos 93 y 94 del Código Penal, que permiten la prisión preventiva de sospechosos respecto de quienes existan "razones concretas" para incoar una causa penal. Cuando una persona es acusada de delitos punibles con al menos dos años de prisión, no existen requisitos adicionales para justificar la prisión preventiva.

Acusaciones formuladas contra la Sra. Uwimana y penas impuestas

9. El 4 de febrero de 2011, el Tribunal Superior de Justicia declaró culpable a la Sra. Uwimana y la condenó a un total de 17 años de prisión y a una multa de 250.000 francos rwandeses (aproximadamente 420 dólares de los Estados Unidos) por cuatro delitos: a) poner en peligro la seguridad nacional, tipificado en el artículo 166 del Código Penal (cinco años de prisión); b) negar el genocidio, contemplado en el artículo 4 de la Ley sobre el Genocidio (diez años de prisión); c) difamar al Presidente, tipificado en el artículo 391 del Código Penal (un año de prisión); y d) crear divisiones, contemplado en el artículo 1 de la Ley sobre Divisionismo (un año de prisión)¹.

10. *Delito de poner en peligro la seguridad nacional.* El artículo 166 del Código Penal castiga con una pena de dos a diez años de prisión a "toda persona que, al pronunciar cualquier tipo de discurso en una reunión o lugar público o al publicar, divulgar, vender, poner a la venta o exponer al público cualquier tipo de escrito, documento impreso, imagen o símbolo o difundir rumores de forma intencionada, instigue o intente instigar a la población a oponerse a las autoridades, o instigue o intente instigar a unos ciudadanos contra otros, o alarme a la población para provocar disturbios sociales en la República". La imputación de este delito a la Sra. Uwimana se basó en una serie de artículos publicados en los N^{os} 15 y 21 de *Umurabyo*.

11. El primer artículo, publicado en el N^o 15 del periódico, se titulaba "Rwandans have spent 15 years in a coma" (Los ruandeses se han pasado 15 años en coma), y en él se criticaba al régimen del Presidente Kagame por favorecer al clan abega, al que este pertenece. Según la información recibida, el fiscal afirmó que en el artículo se instigaba a la población a oponerse a los programas del Gobierno y a odiar a las autoridades. En el mismo número de *Umurabyo* figuraba un artículo titulado "The war between Kagame's regime and the population" (La guerra entre el régimen de Kagame y la población), en el que se sostenía que el ejército rwandés había regresado de la guerra en el Congo tras haberse enriquecido con oro, y que una región entera había sido ocupada por personas ricas, entre ellas militares, quienes habían ocupado granjas por la fuerza y habían impedido que los agricultores cultivaran las tierras, lo que había agravado la hambruna. En el artículo también se criticaba un programa agrícola del Gobierno que prohibía a los agricultores sembrar los cultivos de su elección, obligándolos a sembrar cultivos destinados a alimentar el ganado de los ricos, y se afirmaba que las autoridades habían arrancado la plantación de plátanos de un agricultor. El fiscal calificó este artículo de objetivamente infundado, añadiendo que instigaba a la población a oponerse a las autoridades².

12. En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia enumeró una serie de conclusiones en las que en general confirmaba que la Sra. Uwimana había escrito las afirmaciones mencionadas. El Tribunal resolvió también que no se podía probar ni fundamentar ninguno

¹ La fuente se remite a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia contra las Sras. Uwimana y Mukakibibi, RP 0082/10/HC/KIG, de 4 de febrero de 2011, párr. 85.3 (en adelante, "sentencia del Tribunal Superior de Justicia").

² *Ibid.*, párrs. 14 a 16.

de los hechos señalados en los artículos y que, mediante esos artículos, la Sra. Uwimana había instigado a la población a oponerse a las autoridades. El Tribunal citó los artículos como única prueba de la intención de la Sra. Uwimana de instigar a la población a oponerse a las autoridades.

13. En un artículo titulado "Kagame in difficult times" (Kagame tiene problemas), que se publicó en el N° 21 de *Umurabyo*, se criticaba el sistema *gacaca* de tribunales comunitarios tradicionales por el que se juzga a las personas sospechosas de haber participado en el genocidio de 1994³. En ese artículo, la Sra. Uwimana también sugería que, en 2010, los rwandeses solo tenían cuatro opciones: ser encarcelados, exiliarse, morir o sobrevivir. Asimismo, afirmaba que se estaba dando empleo a algunos grupos y no a otros⁴. Por último, daba a entender que algunos jefes militares eran sospechosos de provocar el creciente aumento de la inseguridad en el país por proporcionar las granadas de mano que se utilizaron en las agresiones ocurridas en Kigali⁵.

14. El fiscal argumentó que en el artículo se pretendía demostrar que el Gobierno oprimía y encarcelaba a los ciudadanos, se minaba la confianza de los ciudadanos en las autoridades y se incitaba a la población a huir del país y a volverse en contra del Gobierno⁶.

15. El Tribunal Superior de Justicia dictaminó que la Sra. Uwimana había infringido el artículo 166 del Código Penal y resaltó que las afirmaciones realizadas en los artículos eran rumores infundados que se habían difundido para incitar a la población a actuar contra el Gobierno, lo que había puesto en peligro la seguridad nacional. El Tribunal desestimó el argumento de la Sra. Uwimana de que sus artículos no habían provocado una inseguridad real en el país, aduciendo que el hecho de provocar una inseguridad real no constituía una condición necesaria para dictaminar que se había infringido el artículo 166 del Código Penal.

16. *Delito de negación del genocidio*. El artículo 4 de la Ley sobre el Genocidio prohíbe "la negación pública del genocidio cometido, su burda minimización o el intento de justificar o aprobar sus motivaciones mediante palabras, escritos, imágenes o cualquier otro medio, así como la ocultación o la destrucción de las pruebas del mismo". La acusación se basó en la siguiente afirmación realizada por la Sra. Uwimana en el N° 21 de *Umurabyo*: "Los ruandeses vivieron durante mucho tiempo con este odio hasta que acabaron matándose unos a otros tras la muerte de Kinani [Habyarimana, expresidente del país]"⁷.

17. La Sra. Uwimana adujo que en el artículo no se negaba el genocidio. A simple vista, el citado pasaje contenía aparentemente un reconocimiento del genocidio, en lugar de una negación del mismo. El Tribunal Superior de Justicia consideró que esa única frase aparecida en el N° 21 del periódico equivalía a negar el genocidio, lo que suponía una violación del artículo 4 de la Ley sobre el Genocidio⁸.

18. *Delito de difamación del Presidente*. El artículo 391 del Código Penal prohíbe "la atribución maliciosa y pública a una persona de un hecho específico que pueda mancillar su honor o su reputación o someterla al desprecio público", bajo pena de hasta un año de prisión y una multa de hasta 10.000 francos rwandeses (aproximadamente 16 dólares de los Estados Unidos)⁹. Las afirmaciones deben "afectar de forma manifiesta" a la persona a la

³ *Ibid.*, párr. 27.

⁴ *Ibid.*, párr. 34.

⁵ *Ibid.*, párrs. 38 y 39.

⁶ *Ibid.*, párrs. 28 y 34.

⁷ *Ibid.*, párr. 42.

⁸ *Ibid.*, párrs. 44 a 46.

⁹ *Ibid.*, párr. 56.

que se refieren¹⁰. La formulación de esta acusación contra la Sra. Uwimana fue consecuencia de dos artículos publicados en *Umurabyo*.

19. El primer artículo en que se basó la acusación de difamación se publicó en el N° 23 de *Umurabyo*. En él, la Sra. Uwimana afirmaba que el Presidente Kagame alentaba y encubría la conducta dolosa de un funcionario gubernamental (Coronel Dodo), y que otro funcionario gubernamental (James Kabarebe) había ayudado a un jefe militar (General Kayumba), que era crítico con el Gobierno, a huir del país¹¹. La Sra. Uwimana alegó que los cargos de corrupción y encubrimiento eran objeto de un debate público generalizado¹².

20. El Tribunal Superior de Justicia resolvió que, en su artículo, la Sra. Uwimana difamaba al Presidente, y que la prueba de su intención dolosa era que las expresiones utilizadas resultaban ofensivas y que los hechos atribuidos al Presidente afectaban a su reputación. El Tribunal señaló también que la Sra. Uwimana sabía que el artículo sería leído por muchos ciudadanos, ya que *Umurabyo* era un periódico quincenal "que se distribuía en todas partes"¹³.

21. En el segundo artículo, publicado en el N° 29 de *Umurabyo*, la Sra. Uwimana había incluido una fotografía del Presidente Kagame con una esvástica nazi de fondo. El fiscal arguyó que la Sra. Uwimana había superpuesto el símbolo sobre el fondo y que se trataba de una imagen difamatoria. La Sra. Uwimana alegó que la fotografía no se había falseado, sino que se había tomado con ocasión de la visita del Presidente a un monumento dedicado a la memoria del holocausto en Alemania, y que, de hecho, esa misma fotografía se había publicado en el sitio web oficial del Presidente¹⁴. El Tribunal Superior de Justicia convino en que no había pruebas de que la Sra. Uwimana hubiera manipulado la fotografía y la absolvió de este delito de difamación¹⁵.

22. *Delito de divisionismo*. El artículo 1 de la Ley sobre Divisionismo de 2001 prohíbe "cualquier discurso, declaración escrita o acción que divida a la población, que pueda desencadenar conflictos entre los ciudadanos o que provoque una revuelta que podría degenerar en luchas entre la población por motivos discriminatorios". La discriminación se define en la legislación como "cualquier discurso, escrito o acción basado en la etnicidad, la región o el país de origen, el color de la piel, los rasgos físicos, el sexo, el idioma, la religión o las ideas cuyo objetivo sea privar a una persona o a un grupo de personas de los derechos que les asisten en virtud de la legislación rwandesa y de las convenciones internacionales en las que Rwanda es parte".

23. La acusación de divisionismo se basó en un artículo publicado en el N° 21 de *Umurabyo*, en el que se afirmaba que los empleos se reservaban para grupos específicos de personas¹⁶. La acusación formulada contra la Sra. Uwimana también se basó en un artículo publicado en el N° 15 de *Umurabyo* en el que se afirmaba que los miembros del clan abega, al que pertenecía el Presidente Kagame, recibían un trato de favor con respecto a los miembros del clan abanyiginya. En él también se abordaban de forma más general los conflictos entre estos dos clanes¹⁷.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, párrs. 51 y 57.

¹² *Ibid.*, párrs. 53 y 54.

¹³ *Ibid.*, párrs. 55 y 56.

¹⁴ *Ibid.*, párrs. 47 y 48.

¹⁵ *Ibid.*, párr. 50.

¹⁶ *Ibid.*, párr. 58.

¹⁷ *Ibid.*, párr. 59.

24. La Sra. Uwimana adujo que sus afirmaciones eran ciertas y que ninguna de las personas a las que se había referido las había comentado o desmentido¹⁸.

25. El Tribunal Superior de Justicia consideró que el hecho de que ninguna de las partes afectadas hubiera desmentido las afirmaciones contenidas en los artículos no eliminaba la culpabilidad de la Sra. Uwimana con arreglo a la Ley sobre Divisionismo. El Tribunal resolvió que las afirmaciones de la Sra. Uwimana sobre el trato de favor dispensado por el Presidente Kagame a un clan con respecto a otro, así como sobre el conflicto entre los dos clanes, tenían como objetivo crear disensiones, por lo que constituían una violación de la Ley sobre Divisionismo¹⁹.

Acusaciones formuladas contra la Sra. Mukakibibi y penas impuestas

26. El 4 de febrero de 2011, el Tribunal Superior de Justicia declaró culpable a la Sra. Mukakibibi y, con arreglo al artículo 166 del Código Penal, la condenó a un total de siete años de prisión por poner en peligro la seguridad nacional²⁰. La acusación se basó en un artículo publicado por la Sra. Mukakibibi con el título "King Kigeli is the solution to national unity and reconciliation" (El Rey Kigeli es la solución para la unidad y la reconciliación nacionales), que apareció en el N° 29 de *Umurabyo*. En el artículo se afirmaba, entre otras cosas, que:

- La forma en que el Presidente Kagame gobernaba el país no agradaba a la mayoría de los rwandeses;
- El objetivo de luchar contra la injusticia por el que se había derrocado el régimen de Habyarimana se había abandonado;
- Por un lado, la mayoría de los rwandeses estaba de acuerdo en que el derrocamiento del régimen de Habyarimana había estado justificado por sus abusos de poder, pero que, por otro lado, Habyarimana no debería haber sido sustituido por Kagame;
- Desde que el Presidente Kagame había asumido el poder, el número de asesinatos había aumentado, la seguridad se había deteriorado, la discriminación seguía dividiendo a los rwandeses, la economía había empeorado, la calidad de la educación había disminuido, el bienestar económico había decaído y se denunciaban homicidios, encarcelamientos y otras violaciones de los derechos humanos²¹.

27. El Tribunal Superior de Justicia sostuvo que el artículo no estaba suficientemente documentado o fundamentado, difundía rumores con el fin de instigar a la población a oponerse al Gobierno e incitaba al conflicto con el fin de crear inseguridad. El Tribunal señaló que la Sra. Mukakibibi sabía que su artículo, publicado en *Umurabyo*, sería leído por un gran número de rwandeses.

28. El Tribunal absolvió a la Sra. Mukakibibi del delito de divisionismo contemplado en el artículo 1 de la Ley sobre Divisionismo de 2001²².

29. La fuente sostiene que la privación de libertad de las Sras. Uwimana y Mukakibibi es arbitraria porque es consecuencia de su ejercicio pacífico de los derechos y libertades garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¹⁸ *Ibid.*, párr. 60.

¹⁹ *Ibid.*, párrs. 61 a 64.

²⁰ *Ibid.*, párr. 90.

²¹ *Ibid.*, párrs. 67 a 70.

²² *Ibid.*, párr. 76.

30. La fuente aduce que la detención de las Sras. Uwimana y Mukakibibi es consecuencia del ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señala que en este caso no se cumple ninguna de las condiciones que, en virtud del párrafo 3 del artículo 19 del Pacto, permiten restringir el ejercicio de este derecho y se remite a la prueba de las tres condiciones elaborada por el Comité de Derechos Humanos, a saber, que la restricción: a) debe estar expresamente fijada por la ley; b) debe perseguir uno de los objetivos legítimos previstos en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto; y c) debe ser necesaria para el logro de ese objetivo y proporcional a él²³. La fuente también se remite a la declaración del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en la que señaló que el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece un umbral muy alto: "El encarcelamiento de personas que buscan, reciben y difunden información e ideas rara vez puede justificarse como medida proporcional para cumplir una de las metas legítimas previstas en el artículo 19, párrafo 3" (A/HRC/17/27, párr. 36).

31. La fuente informa de que el Gobierno de Rwanda ha promulgado varias leyes durante el último decenio para prohibir los tipos de expresiones de incitación al odio que provocaron el genocidio de 1994. Entre esas leyes figuran dos en las que se basó la condena de la Sra. Uwimana: la Ley sobre Divisionismo de 2001 y la Ley sobre el Genocidio de 2003. El Gobierno también ha introducido prohibiciones en el Código Penal para limitar la libertad de expresión, en particular disposiciones que prohíben la difamación y la amenaza a la seguridad del Estado. La fuente sostiene que esas leyes, en las que se fundamentó la condena de las Sras. Uwimana y Mukakibibi, constituyen una presunta violación de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y presenta cuatro argumentos para sustentar su alegación.

32. En primer lugar, las disposiciones legislativas penales relativas a la difamación, como el artículo 391 del Código Penal de Rwanda, son presuntamente incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, dado que la difamación es por definición un acto no violento para el que los recursos civiles se consideran más adecuados que los penales. La fuente señala que el Comité de Derechos Humanos²⁴ y los procedimientos especiales²⁵ han solicitado que se supriman completamente las sanciones penales por difamación. En todo caso, según la fuente, el Gobierno no ha proporcionado al parecer prueba alguna que demuestre que las afirmaciones "afectaron de forma manifiesta" a la reputación del Presidente, tal y como establece el artículo 391 del Código Penal.

33. En segundo lugar, en opinión de la fuente es obvio que, la aplicación que hace Rwanda del artículo 166 ("poner en peligro la seguridad del Estado") a las afirmaciones de las Sras. Uwimana y Mukakibibi no cumple la estricta condición de proporcionalidad y necesidad establecida en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como se señala en el informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, la protección de la seguridad nacional no puede aducirse "para justificar la restricción del derecho a la libertad de expresión, a no ser que el Gobierno pueda demostrar que: a) la expresión tiene por objetivo instigar a la violencia inmediata; b) es probable que instigue a ese tipo de violencia; y c) existe una relación directa e inmediata entre la expresión y la posibilidad de que se produzca ese tipo de violencia" (A/HRC/17/27, párr. 36). La fuente informa de que las autoridades rwandesas no aportaron pruebas que demostraran la intención y la posibilidad de instigar a una violencia inmediata, ni determinaron ninguna relación directa entre las afirmaciones de las

²³ Observación general N° 10 (1983) sobre la libertad de expresión, párrs. 3 y 4.

²⁴ Véanse, por ejemplo, las observaciones finales sobre México (CCPR/C/79/Add.109), párr. 14.

²⁵ Véase, por ejemplo, el documento A/HRC/17/27, párrs. 36 y 73.

Sras. Uwimana y Mukakibibi y alguna violencia potencial o efectiva. Las autoridades se basaron únicamente en los artículos propiamente dichos y en la aserción de la distribución supuestamente amplia del periódico como prueba suficiente de que los artículos constituirían una amenaza para la seguridad nacional. La fuente señala que la tirada efectiva del periódico es de 100 ejemplares quincenales. Pese a la falta de pruebas, 5 de los 17 años de prisión a los que fue condenada la Sra. Uwimana y los 7 años de prisión a los que fue condenada la Sra. Mukakibibi resultaron de sus presuntas violaciones del artículo 166 del Código Penal.

34. En tercer lugar, aunque las autoridades rwandesas pueden restringir, con arreglo al derecho internacional, el derecho a la libertad de expresión cuando se trate de negación del genocidio, la afirmación realizada por la Sra. Uwimana ("Los rwandeses vivieron durante mucho tiempo con este odio hasta que acabaron matándose unos a otros tras la muerte de Kinani [Habyarimana, expresidente del país]") no constituye una negación del genocidio. La fuente aduce que esta afirmación puede interpretarse como un reconocimiento del genocidio más que como una negación. Por otro lado, resulta evidente que la afirmación no constituye una negación del genocidio si se considera en el contexto del artículo en su conjunto, en el que la Sra. Uwimana criticaba las divisiones étnicas en el país, y en el contexto de sus otros artículos, incluido uno publicado en el N° 23 de *Umurabyo*. En este último artículo, la Sra. Uwimana reconocía expresamente tanto la existencia del genocidio como el hecho de que el Gobierno había logrado ponerle fin. Pues bien, 10 de los 17 años de prisión a los que fue condenada se debieron a esta acusación. La fuente sostiene que, independientemente de si la afirmación de la Sra. Uwimana pudiera interpretarse como negación del genocidio, esa pena de prisión tan severa no cumple la condición de proporcionalidad establecida en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

35. Por último, la fuente señala que la Ley sobre Divisionismo en virtud de la cual la Sra. Uwimana fue declarada culpable y condenada a 17 años de prisión contraviene a simple vista las obligaciones contraídas por el Estado con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en lo que respecta a la libertad de expresión de la Sra. Uwimana. En apoyo de su alegación, la fuente se remite a la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos de que la utilización de la Ley sobre Divisionismo contra periodistas podría ser incompatible con las obligaciones contraídas por el Gobierno de Rwanda en virtud del artículo 19, párrafo 3, del Pacto²⁶. Según las informaciones proporcionadas por la fuente, las disposiciones de la Ley sobre Divisionismo son poco claras y no permiten a las personas prever suficientemente cuándo sus conductas exceden de los límites permitidos por la Ley. En cualquier caso, la fuente sostiene que la condena de la Sra. Uwimana en virtud de la Ley sobre Divisionismo por manifestar que la política de empleo del Gobierno era discriminatoria constituye una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta condena se basó en las afirmaciones formuladas por la Sra. Uwimana sobre el trato de favor dispensado por el Presidente Kagame a un clan con respecto a otro, así como sobre el conflicto entre los clanes abanyiginya y abega. La fuente afirma que no solo no está claro que las condiciones para la restricción de la libertad de expresión contempladas en la propia ley sean aplicables a sus manifestaciones, sino que ello no se podría justificar con arreglo al requisito contenido en el artículo 20 del Pacto de que "toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación" estará prohibida.

36. La fuente arguye que la privación de libertad de las Sras. Uwimana y Mukakibibi es arbitraria, ya que es consecuencia de graves violaciones de su derecho a un juicio imparcial. La fuente presenta seis argumentos para sustentar su alegación.

²⁶ Observaciones finales sobre Rwanda (CCPR/C/RWA/CO/3), párr. 20.

37. En primer lugar, el hecho de que los agentes que detuvieron y recluyeron a las Sras. Uwimana y Mukakibibi no las informaran de los cargos que se les imputaban durante aproximadamente una semana constituye una violación de su derecho a ser informadas sin demora de las acusaciones formuladas contra ellas, que está garantizado por el artículo 9, párrafo 2, y el artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

38. En segundo lugar, la fuente aduce que la repetida denegación de la libertad bajo fianza sin una justificación adecuada por el Tribunal Intermedio de Nyarugenge constituye una violación de la prohibición general de la prisión preventiva cuando no lo requieran las necesidades de la administración de justicia o el mantenimiento de la seguridad, tal y como prevén el artículo 9, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el principio 36, párrafo 2, del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

39. En tercer lugar, la fuente sostiene que el período de aproximadamente seis meses transcurrido entre el momento de la detención y la audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia y el período de aproximadamente un año transcurrido entre la sentencia dictada por dicho Tribunal y el juicio de apelación ante el Tribunal Supremo constituyen una violación del derecho de las Sras. Uwimana y Mukakibibi a ser juzgadas "sin dilaciones indebidas", de conformidad con el artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el principio 38 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

40. En cuarto lugar, el Tribunal Superior de Justicia violó presuntamente el derecho de las Sras. Uwimana y Mukakibibi a la presunción de inocencia mientras no se probase su culpabilidad, derecho que está garantizado por el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 19 de la Constitución de Rwanda. La fuente sostiene que el Tribunal Superior de Justicia consideró que las afirmaciones contenidas en los artículos —las cuales, según el Gobierno, constituían rumores— eran falsas, y exigió a las Sras. Uwimana y Mukakibibi que probaran su veracidad²⁷. De este modo, el Tribunal invirtió la carga de la prueba, en violación del principio general de la presunción de inocencia.

41. En quinto lugar, al no tener en cuenta circunstancias atenuantes e imponer penas desproporcionadas e injustas —7 y 17 años de prisión—, el Tribunal Superior de Justicia infringió presuntamente la prohibición de imponer penas crueles o inhumanas contemplada en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 15 de la Constitución de Rwanda. En opinión de la fuente, el Tribunal Superior de Justicia no tuvo en cuenta tres circunstancias atenuantes de peso (el estado de salud de las Sras. Uwimana y Mukakibibi, el hecho de que los familiares a su cargo se hubieran quedado sin una atención adecuada, y el hecho de que no se hubiera producido un perjuicio real), pese a la potestad del Tribunal para hacerlo con arreglo al artículo 82 del Código Penal de Rwanda. En concreto, en virtud del artículo 83 del Código Penal, el Tribunal Superior de Justicia podría haber reducido las penas de las Sras. Uwimana y Mukakibibi a un año de prisión, período que ya han cumplido.

42. Por último, la fuente alega que el Tribunal Superior de Justicia no actuó como un órgano judicial competente e independiente, en presunta violación del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la legislación nacional rwandesa.

²⁷ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, párrs. 21, 25, 31 y 36.

Situación de detención actual

43. La Sra. Uwimana es seropositiva. Aunque un hospital local le proporciona medicamentos antirretrovirales, la atención médica que recibe en la prisión es inadecuada. Recientemente le han aparecido erupciones cutáneas y su recuento sanguíneo ha registrado niveles bajos.

44. La Sra. Mukakibibi es diabética y tiene problemas de tensión arterial que requieren medicación regular. Durante el período de reclusión en curso también le ha aparecido una úlcera. En la actualidad, la Sra. Mukakibibi recibe los medicamentos que necesita de forma irregular y únicamente de manos de su hija, cuando esta la visita en prisión.

45. Actualmente las Sras. Uwimana y Mukakibibi están encarceladas en la Prisión Central de Kigali, donde han permanecido recluidas desde su detención en julio de 2010.

46. Según la información recibida, el Tribunal Supremo de Rwanda conoció de los recursos interpuestos contra las condenas los días 30 y 31 de enero de 2012, y se prevé que dicte sentencia el 16 de marzo de 2012.

Respuesta del Gobierno

47. Por carta de fecha 13 de marzo de 2012, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno las alegaciones contenidas en las informaciones presentadas por la fuente con el fin de que respondiera a las mismas.

48. Una vez que expiró el plazo de 60 días sin que el Gobierno hubiera pedido una prórroga, el Grupo de Trabajo decidió emitir una opinión de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo.

Comentarios adicionales de la fuente

49. Por carta de fecha 28 de agosto de 2012, la fuente informó al Grupo de Trabajo de que, el 5 de abril de 2012, el Tribunal Supremo había absuelto a la Sra. Uwimana de los delitos de negación del genocidio y divisionismo. Sin embargo, había confirmado su condena por difamación y por poner en peligro la seguridad nacional. La pena de la Sra. Uwimana se redujo de 17 a 4 años de prisión.

50. La fuente informó también al Grupo de Trabajo de que, el 5 de abril de 2012, el Tribunal Supremo había confirmado la condena de la Sra. Mukakibibi por poner en peligro la seguridad nacional. Su pena se redujo de siete a tres años de prisión.

Deliberaciones

51. Las Sras. Uwimana y Mukakibibi, periodistas rwandesas, fueron detenidas los días 9 y 10 de julio de 2010, respectivamente, por haber publicado artículos periodísticos. Fueron acusadas de delitos contra la seguridad nacional, negación del genocidio, difamación del Presidente y divisionismo. Fueron juzgadas por el Tribunal Superior de Justicia el 4 de febrero de 2011 y condenadas a 17 y 7 años de prisión, respectivamente, además del pago de multas. Según los comentarios adicionales recibidos de la fuente, el Tribunal Supremo redujo la pena de la Sra. Uwimana a cuatro años de prisión por difamación y por poner en peligro la seguridad nacional. La pena de la Sra. Mukakibibi se redujo a tres años de prisión por poner en peligro la seguridad nacional.

52. El Grupo de Trabajo recuerda que su mandato no consiste en actuar como procedimiento de recurso o casación respecto de las jurisdicciones nacionales, sino en verificar, de conformidad con sus métodos de trabajo, si la detención se ajusta a las normas y reglamentaciones internacionales pertinentes. Asimismo, el mandato del Grupo de

Trabajo incluye el examen de la conformidad de la legislación nacional con los instrumentos y las normas internacionales de derechos humanos aplicables.

53. Primeramente, es importante recordar el genocidio ocurrido en 1994 en Rwanda, el clima de inestabilidad que se instauró posteriormente y el largo proceso de reconstrucción y reconciliación, todo lo cual repercutió negativamente en el derecho a la libertad de expresión, que es lo que se examina en el presente caso presentado ante el Grupo de Trabajo.

54. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza este derecho y, en su párrafo 3, determina las situaciones en las que su ejercicio se puede restringir. Sin embargo, dicha restricción debe estar fijada por la ley y ser proporcional y necesaria para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otras personas, así como la protección de la seguridad nacional o la salud o la moral públicas.

Acusaciones formuladas contra la Sra. Uwimana y la Sra. Mukakibibi y su conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos

55. Aunque las Sras. Uwimana y Mukakibibi fueron absueltas del delito de divisionismo por el Tribunal Supremo, el Grupo de Trabajo considera apropiado recordar la conclusión del Comité de Derechos Humanos en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Rwanda, según la cual el Estado parte debería "asegurar que cualquier restricción que se imponga al ejercicio de sus actividades se ajuste a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto, y abstenerse de reprimir supuestos actos de 'divisionismo'. Asimismo, debería investigar los actos de intimidación o de agresión mencionados anteriormente y sancionar a sus autores" (CCPR/C/RWA/CO/3, párr. 20). De igual modo, el Experto independiente sobre cuestiones de las minorías señaló que:

La redacción actual de las leyes rwandesas relativas a la ideología genocida, al divisionismo y al sectarismo resulta problemática y está mal definida. Asimismo, la aplicación de dichas leyes ha excedido considerablemente los límites de la libertad de expresión previstos en el artículo 20, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Estas leyes deben revisarse con carácter de urgencia, y se deberían aplicar salvaguardias con el fin de garantizar que no se utilicen para silenciar discrepancias o restringir las actividades legítimas de la oposición política (A/HRC/19/56/Add.1, párr. 89).

56. El Grupo de Trabajo también observa que el Tribunal Supremo absolvió a la Sra. Uwimana del delito de negación del genocidio pero, subraya su preocupación acerca de la imputación de dicha acusación en la práctica, que frecuentemente se hace sin que se demuestre adecuadamente la intención del acusado.

57. En cuanto a la acusación de poner en peligro la seguridad nacional, que el Tribunal Supremo confirmó respecto de la Sra. Uwimana y la Sra. Mukakibibi, el Grupo de Trabajo resalta que las restricciones contempladas en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no deben ser excesivamente amplias²⁸. En efecto, "[c]uando un Estado parte haga valer una razón legítima para restringir la libertad de expresión, deberá demostrar en forma concreta e individualizada la naturaleza precisa de la amenaza y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que se haya adoptado, en particular estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la

²⁸ Un argumento similar figura en el párrafo 34 de la Observación general N° 34 (2011) del Comité de Derechos Humanos sobre la libertad de opinión y la libertad de expresión.

amenaza"²⁹. Tras examinar el contenido específico de las afirmaciones realizadas en diferentes artículos publicados en *Umurabyo*, el Grupo de Trabajo considera que estas reflejan simplemente una opinión y en modo alguno incitan a socavar la seguridad nacional de Rwanda. Tampoco suponen una amenaza real, inminente o hipotética para la seguridad nacional de Rwanda, tal como exige el artículo 166 del Código Penal. En opinión del Grupo de Trabajo, no se puede considerar que exista una relación de causa y efecto suficiente entre afirmaciones como "los rwandeses se han pasado 15 años en coma", "la guerra entre el régimen de Kagame y la población" o "Kagame tiene problemas", por un lado, y una posible amenaza para la seguridad nacional, por otro. Del mismo modo, los párrafos 14 a 42 de la decisión del Tribunal Supremo de Rwanda tampoco establecen, más allá de cualquier duda razonable, que las Sras. Uwimana y Mukakibibi intentaran incitar a conducta alguna que minara la seguridad nacional.

58. Con respecto a la acusación de difamación con arreglo al artículo 391 del Código Penal, que el Tribunal Supremo confirmó en el caso de la Sra. Uwimana, el Grupo de Trabajo recuerda que la posibilidad de criticar a funcionarios públicos y, en particular, a jefes de Estado o representantes gubernamentales es un componente inherente del derecho a la libertad de expresión y de opinión. En cuanto al principio de proporcionalidad que subyace al artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también se debe tener en cuenta "la forma de expresión de que se trate así como los medios por los que se difunda. Por ejemplo, el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática"³⁰.

59. En el párrafo 47 de su Observación general N° 34, el Comité de Derechos Humanos subrayó que:

Las leyes sobre difamación deben redactarse con cuidado para asegurarse de que cumplan lo dispuesto en el párrafo 3 [del artículo 19] y no sirvan en la práctica para atentar contra la libertad de expresión. Todas las leyes de esta índole, y en particular las leyes penales relativas a la difamación, deberían incluir medios de defensa tales como la prueba de la verdad y no aplicarse a las formas de expresión que, por su naturaleza, no estén sujetas a verificación. Al menos en lo que atañe a los comentarios sobre figuras públicas, habría que considerar la posibilidad de no sancionar las declaraciones que no fueran verídicas pero se hubieran publicado por error y no con mala intención. Sea como fuere, un interés público en el objeto de las críticas debería poder alegarse como defensa. Los Estados partes deberían tener cuidado de no imponer sanciones excesivamente punitivas. Cuando procediera, los Estados partes deberían fijar límites razonables al requisito de que el demandado reembolse las costas de la parte en cuyo favor se haya fallado en el juicio. Los Estados partes deberían considerar la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, y la pena de prisión no es nunca adecuada. No es permisible que un Estado parte acuse a alguien por el delito de difamación, pero no lo someta luego a juicio en forma expedita; esa práctica tiene un efecto disuasivo que puede restringir indebidamente el ejercicio de la libertad de expresión.

60. El Grupo de Trabajo suscribe la opinión del Comité de Derechos Humanos anteriormente citada, a saber, que los Estados partes deberían despenalizar la difamación y que la prisión no es nunca una pena adecuada para dicha infracción.

²⁹ *Ibid.*, párr. 35; véase también la comunicación N° 926/2000 del Comité de Derechos Humanos, *Shin c. la República de Corea*, dictamen aprobado el 16 de marzo de 2004.

³⁰ Observación general N° 34 del Comité de Derechos Humanos, párr. 34.

61. Por otro lado, en el presente caso, el Grupo de Trabajo ha examinado los párrafos 68 a 75 de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Rwanda en abril de 2012, en los que dicho Tribunal examina la condena por difamación pronunciada contra la Sra. Uwimana sobre la base de la afirmación contenida en el artículo publicado en el N° 23 de *Umurabyo*. En ese artículo, la Sra. Uwimana afirmaba que el Presidente Kagame alentaba y encubría la conducta dolosa del funcionario gubernamental Coronel Dodo, concretamente el robo de dinero a trabajadores de Nyabugogo. La Sra. Uwimana afirmó ante el Tribunal que había realizado dicha afirmación sobre la base de una entrevista transmitida por Radio Rwanda, pero no pudo aportar ninguna prueba para sustentar su versión.

62. Sin entrar en el fondo de la causa elevada al Tribunal Supremo, el Grupo de Trabajo señala lo siguiente: en primer lugar, el análisis realizado por el Tribunal Supremo no establece, más allá de cualquier duda razonable, que exista mala fe o intención dolosa en la afirmación de la Sra. Uwimana. En segundo lugar, el Tribunal basó su razonamiento en que la Sra. Uwimana sabía que su artículo sería leído por un gran número de lectores y mancillaría el honor o la reputación del Presidente. En tercer lugar, el Tribunal no demostró específicamente de qué forma las afirmaciones "afectaban de forma manifiesta" a la reputación del Presidente, que es uno de los elementos constitutivos del delito previsto en el artículo 391 del Código Penal.

63. En vista de las observaciones anteriores, el Grupo de Trabajo concluye que las acusaciones por las que fueron condenadas las Sras. Uwimana y Mukakibibi, así como los periodos de reclusión resultantes, son consecuencia directa de su ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y de expresión garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, su detención se inscribe en la categoría II contemplada en los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

Derecho de las Sras. Uwimana y Mukakibibi a un juicio imparcial

64. En cuanto a las violaciones de procedimiento del derecho a un juicio imparcial, la fuente cita seis violaciones en la información que proporciona. A modo de recordatorio, las Sras. Uwimana y Mukakibibi fueron detenidas los días 9 y 10 de julio de 2010, respectivamente, y juzgadas por el Tribunal Superior de Justicia el 4 de febrero de 2011. El Tribunal Supremo dictó sentencia en abril de 2012.

65. El Grupo de Trabajo está de acuerdo con el argumento de la fuente de que el hecho de no informar a las peticionarias de los cargos que se les imputaban y de sus derechos tras casi una semana de detención constituye una violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del artículo 9, párrafo 2, y el artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, considera que, al imponer a las acusadas la carga de demostrar ante el Tribunal la veracidad de sus afirmaciones publicadas en la prensa, se violó su derecho a la presunción de inocencia mientras no se demostrara su culpabilidad, derecho que está garantizado por el artículo 10 y el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 19 de la Constitución de Rwanda. Estos dos elementos por sí solos sustentan la conclusión del Grupo de Trabajo de que la inobservancia parcial del derecho de las Sras. Uwimana y Mukakibibi a un juicio imparcial ha sido suficientemente grave para que su detención sea arbitraria. Después de establecer el carácter arbitrario de la detención en el marco de la categoría III, el Grupo de Trabajo no necesita ahondar en las demás denuncias de violación del procedimiento expuestas por la fuente.

Decisión

66. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de las Sras. Uwimana y Mukakibibi es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9 y 10, el artículo 11, párrafo 1, y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 9, párrafos 1 y 2, el artículo 14, párrafos 2 y 3 a), y el artículo 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

67. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de Rwanda que proceda inmediatamente a poner en libertad a las Sras. Uwimana y Mukakibibi, se asegure de que están en buen estado de salud y les proporcione sin demora una reparación adecuada de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo recomienda al Gobierno de Rwanda que ajuste a la legislación internacional pertinente las disposiciones de su Código Penal que puedan poner en peligro el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Por último, el Grupo de Trabajo invita al Gobierno a mejorar la cooperación con sus procedimientos en el futuro con arreglo a las resoluciones pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

[Aprobada el 29 de agosto de 2012.]
